



EL PRI a la Presidencia

In-transiciones, imposturas y regresiones en el sistema político mexicano

Víctor López Villafaña

Somos parte de una generación que ha atestado una serie de luchas políticas en México, especialmente desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado hasta 2012. Estas luchas —directa o indirectamente— estaban, y siguen estando, dirigidas a terminar con el régimen autoritario surgido de la posrevolución para establecer un verdadero sistema democrático que rija la vida política del país. Había una gran ilusión y esperanza de que se podía cambiar este sistema y de que podíamos establecer una verdadera democracia. Sin embargo, después de décadas de gran desgaste de energía social y política, el país está lejos de haber constituido un régimen democrático. Y es que un régimen democrático real cambia la naturaleza de la disputa por el poder entre las clases o élites dominantes y las clases subalternas; pero lo que hemos visto durante este tiempo ha sido la continuación del viejo dominio de la clase burocrática gobernante, bajo distintas modalidades, a la que se ha unido de manera directa los grupos empresariales hegemónicos.

Queremos sostener la hipótesis central de que lo que ha determinado las sucesivas crisis políticas en México, desde 1988, está vinculado con la acción de las élites políticas y económicas para resistir y evitar, por todos los medios, la posibilidad de que una nueva coalición de fuerzas populares alcance el poder nacional. En todos estos años se ha suscitado una gran cantidad de movilizaciones regionales y de carácter nacional que buscan distintas reivindicaciones, siendo las principales aquellas enmarcadas en el campo electoral, especialmente en las elecciones presidenciales, donde se han manifestado con mayor claridad las políticas y las estrategias de estas élites para contener el ascenso de nuevas coaliciones con proyectos políticos y económicos alternativos al neoliberalismo. El regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia en 2012 es un episodio más de esta larga confrontación histórica.¹

En México ha sucedido lo que puede llamarse el ciclo de los fraudes electorales. Estos fraudes han sido de una gran relevancia, no sólo por su significado político inmediato, sino por los cambios que generaron en las alianzas, las disputas y el entramado político-electoral en el país. Elecciones libres y sinceras, como decía Maurice Duverger, no han sido posibles en México. Después de que se formó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, uno de los grandes retos era terminar el predominio de los caudillos y transferir el poder político al nuevo partido, pero los ensayos de democratización a través del ejercicio del voto dentro de esta nueva formación política fracasaron, lo que llevó a que la nueva distribución del poder pasara a constituirse cuando el partido se estructuró por sectores en 1938, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Fue una solución exitosa, pues campesinos, trabajadores y otros grupos serían controlados por poderosas organizaciones burocráticas unidas al partido, y así se terminaba con la necesidad de tener elecciones para dilucidar quiénes serían sus representantes políticos. El presidente saliente designaba al candidato oficial, como regla sagrada del sistema, para evitar divisiones y conflictos desastrosos.

Se estableció una democracia formal que, fundamentalmente, operaba para elegir al presidente del país cada seis años, con un sistema de partidos que sancionaba en la formalidad esta democracia y que servía para encumbrar al candidato del partido de Estado, que después de 1946 sería el PRI. Sin embargo, se dieron elecciones fuertes, con candidatos salidos de las filas revolucionarias y, en términos de la época, consistieron en una «oposición transitoria», con partidos que desaparecieron después de celebradas las elecciones. Son de mencionarse los casos de las elecciones de 1940, con el candidato Juan Andrew Almazán que disputó el poder al general Manuel Ávila Camacho, que según las memorias de Gonzalo N. Santos, triunfó gracias al robo de urnas e incluso al asesinato de seguidores de Almazán. Otra elección de este corte fue la de 1952, en la cual el candidato oficial tuvo como contrincante al general Miguel Henríquez Guzmán, otro exponente salido de las filas de la clase revolucionaria.

Las elecciones complicadas para el PRI-sistema de esa época fueron aquellas en las que se perdía el control directo (1929, 1940, 1946 y 1952), es decir, las que provenían de coaliciones partidarias formadas *ex profeso* para las elecciones y que tenían a candidatos que podríamos llamar «independientes», pero salidos de la propia clase política dominante, otro rasgo a destacar. La gente salía a votar por lo que consideraba «opciones reales de cambio» y por candidatos no oficiales. Otro rasgo de este sistema que queremos subrayar consiste en el hecho de que el Partido Comunista fue considerado ilegal y, por lo tanto, no podía participar en las elecciones del país. Dentro del PRI-sistema, los partidos políticos en realidad no aspiraban a conquistar el poder; pero los comunistas, con todo y sus divisiones, fracturas y poco peso político en el país, tenían como meta la toma del poder, y eso los convertía en unos disidentes diferentes y peligrosos para la hegemonía priísta.

Las elecciones de 1988 y «la caída del sistema» son muy importantes pues, según nuestra opinión, se constituyen en una matriz de lo que vendría a suceder en el país hasta la etapa contemporánea. En estas elecciones, una nueva escisión del PRI daría como resultado la formación de una nueva coalición de fuerzas aglutinadas a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas bajo la bandera del Frente Democrático Nacional. En realidad, el sistema priísta se *cayó* desde que empezó la campaña formal del ingeniero Cárdenas, que obtuvo un apoyo popular formidable en contra del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, que ya representaba a la nueva facción financiera, tecnócrata y neoliberal que se había encumbrado dentro del Estado mexicano, especialmente como resultado del crecimiento de la explosión financiera que había vivido el país desde 1970 y que con la crisis de 1982 había pasado a comandar la nueva trayectoria y diseño económico del país. Otro hecho importante fue que sólo unos pocos meses antes de la elección, Heberto Castillo, can-

didato del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), retiró su candidatura y se unió a la coalición de Cuauhtémoc Cárdenas. Fue un golpe muy duro para el sistema electoral mexicano, pues ya no había posibilidades para maniobrar y esto último condujo inexorablemente a la caída del sistema de conteo por una semana y a la alteración de la votación a favor de Salinas de Gortari, lo que generaría una crisis política de grandes consecuencias para el futuro del país.

Fueron muchas las consecuencias que este fraude electoral causó en todo el espectro político, y sólo nos vamos a concentrar en las más importantes desde nuestro punto de vista. Una de ellas fue lo que se llamó la política de *concertación* entre el nuevo presidente Salinas y la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), consistente en el reconocimiento de los triunfos electorales en regiones panistas a cambio del reconocimiento del PAN a Salinas como presidente legítimo del país. Pero los panistas de 1988–1989 eran ya muy diferentes de los panistas fundadores y tradicionales políticos que habían militado años antes en ese partido. En este periodo llegaron a este partido los *neopanistas*, empresarios, principalmente, en regiones que por diversos motivos se habían lanzado a la lucha política contra la hegemonía del PRI. Muchos de los gobernadores que asumirían el poder por el PAN eran representantes de este nuevo grupo empresarial–regional. Vicente Fox, que sería el primer presidente del PAN en 2000, provenía precisamente de este grupo.² Entonces, históricamente se puede afirmar que hay una línea que conduce del fraude de 1988 al triunfo panista de 2000.

Otra consecuencia importante de este fraude era que el presidente Salinas requería, para sostenerse en el poder con ciertos grados de fortaleza, en medio de esta conmoción y agrietamiento del sistema político, restaurar la vieja alianza de las burocracias sindicales del PRI con el nuevo presidente surgido de las filas del grupo que había diseñado la reforma económica del Estado

mexicano (fin de subsidios, adelgazamiento y privatizaciones de las empresas estatales, etcétera), lo que había provocado fisuras importantes entre estos grupos. Un caso muy destacado fue el golpe a la dirigencia sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su renovación por un nuevo liderazgo adicto al presidente Salinas. De igual manera, la renovación en el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con el arribo de Elba Esther Gordillo, también impuesta por el presidente Salinas. Por supuesto, las alianzas de este tipo se dieron también en el terreno político para abrazar de nueva cuenta a los líderes históricos del priísmo, como Carlos Hank González, gestor del llamado grupo Atlacomulco del Estado de México. Como se puede ver, otra línea histórica, herencia de estas convulsiones y reacomodos entre los grupos del viejo y nuevo poder político, nos trae a 2012, con la candidatura y regreso del PRI a la Presidencia por medio de Enrique Peña Nieto, que había sido, precisamente, gobernador del Estado de México.

Otra consecuencia, no menos importante, sería la alineación económica y política de México con Estados Unidos, que llevaría a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y con ello a una mayor dependencia económica y política del país y al aseguramiento de las políticas neoliberales en México y América Latina. El reconocimiento del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas hubiera significado el primer triunfo político en toda América Latina en contra de estas políticas neoliberales, anticipando lo que vendría después en Brasil, bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, y otros países del cono sur; por ello, el TLCAN vino a ser un factor muy importante para Estados Unidos, al garantizar la imposición y la continuidad de los grupos neoliberales en México.

Los medios de comunicación fueron centrales para crear la nueva legitimidad de Salinas. En el pasado, durante la época dorada del PRI–sistema, los medios impresos y televisivos tenían un aspecto pasivo en el sentido de que sólo apuntalaban la figura presidencial bajo reglas muy claras de sujeción y acomodamiento al poder autoritario del régimen político mexicano. A partir de la elección de 1988, se volvieron medios muy activos, pues primero se dedicaron a denostar e ignorar la campaña de Cárdenas y después del fraude a encumbrar a Salinas para buscar endilgar su presencia en las masas mexicanas. Aquí vemos otro hilo histórico de la mayor importancia en el devenir del fracaso de la política mexicana: al convertirse los medios no en instrumentos de los procesos de democratización, como debería esperarse en una supuesta «transición», sino como fuerzas políticas activas para favorecer determinados intereses y perder cualquier signo de autonomía, independencia y neutralidad. En estas trifulcas políticas, los medios de comunicación, en especial Televisa, pasaron a constituirse en factores esenciales a través de campañas parciales e insidiosas contra candidatos opositores, para luego sostener a gobiernos impuestos por medio de fraudes electorales. Lo que hemos visto en las campañas de las últimas elecciones

y sobre todo en los procesos posfraudes, incluyendo el de 2006, salvo honrosas excepciones de periodistas y ciertos medios de largo compromiso, ha sido un invariable comportamiento funesto de los medios de comunicación en México. El premio a toda esta actuación de los medios fue la entrega anticipada de la campaña presidencial al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para convertirlo, primero, en candidato indiscutible dentro del PRI y, luego, en candidato triunfador en la elección de 2012. Obviamente, hay intercambio de favores, el papel monopólico de los medios de comunicación se ha acrecentado y así las compañías televisoras del país son protagonistas directas en la forja del poder político, y como casi todo lo que producen es de mala calidad, han contribuido poderosamente al deterioro del espacio democrático, que como sabemos es el lugar en las democracias modernas en donde se gesta la deliberación entre la clase política y la ciudadanía. Por eso, les asiste la mayor razón a los estudiantes del movimiento #YoSoy132 cuando hacen una crítica medular al papel de los medios en la democratización del país y en su enorme contribución al pobre desempeño de la política nacional.

Los movimientos sociales y la participación ciudadana que ellos han representado ha sido amplia, diversa y muy rica en propuestas a lo largo de estas décadas. Han sido un ingrediente importante para movilizar al país y evitar mayores trastornos del autoritarismo que bajo nuevas formas se da en el país. El politólogo Samuel Huntington afirmaba en su obra celebre *El orden político en las sociedades en cambio* que para saber si estábamos en realidad ante una democracia debíamos saber si el régimen político estimulaba la participación política, y si ésta se traducía en respuestas institucionales para procesar satisfactoriamente las demandas. En este último punto es donde se da el fracaso de la política mexicana, pues todos los movimientos, casi sin excepción, han sido mediatizados o, incluso, como con los Acuerdos de

San Andrés, que una vez aceptados por el gobierno en turno fueron desechados, violando la palabra de honor del Estado mexicano. Nos parece que sigue vigente la vieja divisa del antiguo sistema, de que es negativo para la clase gobernante aceptar los reclamos populares y como consecuencia las instituciones centrales de la democracia, como la participación ciudadana, la transparencia, la solución a los conflictos con apego al derecho, quedando sólo como retórica que sirve a la demagogia gubernamental como argumento para difundir que México vive ya en la democracia.

Habría dos hipótesis que subyacen en todas estas resistencias y distorsiones de la política mexicana. Una, que ya hemos mencionado, es impedir que movimientos políticos y coaliciones con orientación popular y de izquierda lleguen a tomar el control del Estado mexicano. Ésta ha sido una invariable del régimen desde el pasado y ha estado presente desde 1988. Otra hipótesis es que las élites en México realmente no tienen un deseo genuino de hacer que una verdadera democracia impere en el país. Por eso no hay transparencia en el ejercicio del poder ni imperio de la ley; la impunidad y la corrupción son ahora brutales en el país y como consecuencia hay un cinismo impresionante de la clase gobernante.³

El sistema político mexicano está infectado de todos estos virus malignos que pululan desde hace años, dañando al cuerpo de la nación. Los partidos políticos, por ejemplo, son un desastre, y no se diga su clase política dirigente; es difícil encontrar un líder genuino, ético y democrático. Tenemos un tremendo déficit de vida democrática en los partidos y así es complicado llevar a cabo una transición a la democracia, pues no hay materia prima de recursos humanos. Además, como producto del fraude de 2006, Felipe Calderón impuso la *guerra contra el narcotráfico*, para embarcarse en una vía violenta de aceptación de legitimidad y gobernabilidad autoritaria. Ya sabemos cuál ha sido el balance del sexenio calderonista; una montaña interminable de muertos y violaciones a los derechos humanos. El narcotráfico tiene fuertes lazos con instituciones del Estado mexicano. La colusión entre el crimen organizado y la clase política es otro fenómeno que se esparce a lo largo de gobiernos locales y el federal, y ése es otro elemento que debemos añadir a los males que impiden que México pueda tener una verdadera democracia.⁴

Lo que hemos llamado «transición» en realidad ha significado el paso de una forma de ejercicio del poder de una burocracia política emanada de la conformación del régimen político de 1929, que se sustentaba en la hegemonía de un partido único, a la conformación de un nuevo grupo de intereses en el que se fusionan viejos sectores del antiguo régimen, incluyendo a los panistas que eran la «oposición leal», con el arribo y la consolidación de grupos empresariales nativos ligados a la explotación de industrias tradicionales y monopólicos. Desde la crisis del antiguo sistema en la década de los ochenta del siglo pasado, hemos visto su transformación en un nuevo entramado de intereses en el que se han incorporado directa-

mente los grupos empresariales monopolistas y tradicionales, y el predominio antiguo de un partido único; se ha fracturado en una diversidad de fuerzas políticas que se han sumado para obtener beneficios directos. Esta nueva elite «extractiva»⁵ no tiene interés genuino en hacer que en México imperara una verdadera democracia, ni interés en crear instituciones inclusivas en materia de economía, para mejorar el entorno de competencia económica. En el terreno del desarrollo, México ha tenido un crecimiento muy pobre con baja creación de empleo y esta élite, en lugar de buscar estrategias endógenas de crecimiento, centra su objetivo en la inversión extranjera y la apertura

comercial para convertir a México en plataforma exportadora de grandes transnacionales, con poca capacidad de arrastre para las pequeñas y medianas empresas manufactureras mexicanas.

Como conclusión, podemos decir que el regreso del PRI a la presidencia en México no es el regreso al antiguo sistema —éste ya dejó de existir—, pero sí la continuación de la dominación de intereses políticos y económicos que se resisten a aceptar la transformación democrática del país y la búsqueda de nuevas alternativas para la solución de los grandes problemas nacionales. Esta situación, lejos de resolverse con el regreso del PRI al control del poder político nacional, será motivo de nuevas crisis y luchas en el país, pues las injusticias sociales y políticas van a continuar, generando nuevas movilizaciones en todo el territorio nacional. Además, el escalamiento de la violencia, producto del crimen organizado y de sus vínculos con esta clase política y empresarial, será otro ingrediente de inestabilidad e ingobernabilidad creciente en México.

Notas

- 1 En el año de 1988 utilizaron la «caída del sistema». En 2000 se valieron de la alternativa panista del ranchero simpático y valiente. En 2006, de la campaña sucia, de la alianza con el SNTE para favorecer a Calderón con los votos de los profesores y de las trampas de votos en urnas seleccionadas. En 2012 usaron la modalidad de una campaña anticipada y abusiva de un gobernador atractivo, más la compra de votos de población marginada y pobre con tarjetas Soriana y Monex.
- 2 El asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, y luego la crisis política entre Salinas de Gortari y el nuevo presidente Ernesto Zedillo, derivada de la crisis económica de diciembre de 1994, fueron elementos centrales en la división de los grupos priístas que abonaron el terreno para el ascenso de un candidato del PAN, como Vicente Fox, y su triunfo en las elecciones de 2000.
- 3 La campaña de Felipe Calderón en 2006 tuvo como eje central la caracterización de Andrés Manuel López Obrador como «un peligro para México», apoyado por el empresariado más conservador del país. Así, Calderón pasaría de esta *guerra sucia* a la *guerra contra el narcotráfico*.
- 4 En el libro de Anabel Hernández, *Los señores del narco* (Grijalbo, 2010), se hacen señalamientos de los vínculos del narcotráfico con la clase política a todos los niveles. Es posible deducir, a partir de toda la información que suministra este libro, que México es ya en consecuencia un narco-Estado.
- 5 Daron Acemoglu y James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, New York, Crown Publishers. En este libro, la élite extractiva mexicana es tratada como un paradigma de una clase que controla el poder, restringe los derechos políticos de sus ciudadanos y usa las instituciones económicas en su beneficio. Todo lo anterior explica no sólo la falta de verdadera democracia, sino el mantenimiento de la pobreza en México.